



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-008-2019-00588-01 (O2-22-269)
Accionante: CECILIA SIERRA CORREA
Accionada: AFP PORVENIR S.A. Y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
Procedencia: JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 0028
Asunto: RELIQUIDACION PENSIÓN SOBREVIVIENTES RAIS

En Medellín, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-008-2019-00588-01 (O2-22-269), instaurado por CECILIA SIERRA CORREA en contra de AFP PORVENIR S.A. y donde fue integrada la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la señora CECILIA SIERRA CORREA, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 16 de junio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora CECILIA SIERRA CORREA actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad AFP PORVENIR S.A., a efectos de que se disponga la reliquidación y pago de la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera permanente supérstite del causante señor ÓSCAR HOYOS NARANJO; reliquidación y pago

de diferencias pensionales que se causaron a partir del 16 de febrero de 2010, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación.

En respaldo de sus aspiraciones señala que, el señor ÓSCAR HOYOS NARANJO fue afiliado a la AFP PORVENIR S.A., administradora que le reconoció pensión de invalidez en cuantía de un SMMLV. Recuerda que en el año 2008 el mencionado señor HOYOS NARANJO inició acción judicial en contra de la administradora del RAIS con miras a obtener la reliquidación del derecho pensional reconocido, proceso judicial que fue de conocimiento en primera instancia por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Medellín y que culminó con la decisión del 12 de septiembre de 2018 proferida por la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que desató el recurso extraordinario de casación y dictó sentencia de instancia.

Agrega que la providencia en sede de casación, resolvió acceder a los pedimentos de la demanda, disponiendo la reliquidación del derecho pensional a partir del 15 de julio de 2005 y en cuantía de \$2.400.095,48; aclarando que el señor ÓSCAR HOYOS NARANJO falleció el 16 de febrero de 2010, esto es, previo a la resolución del derecho pensional por parte de la jurisdicción, y es por ello que, a partir de esa data, la administradora del RAIS reconoció la sustitución pensional por causa de muerte; aclarando que, tomando como base la decisión judicial que accedió a la reliquidación del derecho pensional por invalidez del señor HOYOS NARANJO y como titular de la sustitución pensional al ser compañera permanente supérstite, reclamó a la AFP PORVENIR S.A., el 09 de diciembre de 2018 y el 16 de febrero de 2010, la reliquidación del derecho pensional sin que a la fecha de presentación de la demanda se haya dado respuesta a dichas reclamaciones.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 16 de octubre de 2019 (págs.87 a 88, doc.02, carp.01), y se notificó a la demandada AFP PORVENIR S.A., el 13 de febrero de 2020, (págs.103, doc.02, carp.01), ordenándose la integración a la litispendencia de la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. bajo la figura del litis consorcio necesario por pasiva (doc.03, carp.01).

La accionada AFP PORVENIR S.A., discutió a la prosperidad de las pretensiones, admitiendo como ciertos las situaciones fácticas relacionadas con los resultados del proceso judicial promovido por el señor ÓSCAR HOYOS NARANJO, el estatus de pensionado de este, y la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional de la demandante por la muerte del señor HOYOS NARANJO, manifestando no constarle o no ser ciertos los demás hechos. En su

defensa, propuso como excepción dilatoria la falta de integración de la litis por pasiva y como perentorias las que individuó como falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción y compensación. (págs.118 a 160, doc.01, carp.01).

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. también se opuso a la prosperidad de los pedimentos (doc.08, carp.01), aceptando la veracidad de los hechos que hacen referencia a la muerte del señor ÓSCAR HOYOS NARANJO el 16 de febrero de 2010, el reconocimiento pensional que disfrutó en vida este y la sustitución pensional que le fue otorgada a la señora CECILIA SIERRA CORREA como derechohabiente, manifestando no constarle o no ser ciertos los demás. Como sustento de su oposición, formuló los medios exceptivos de mérito que nominó falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción.

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 16 de junio de 2022 (doc.15, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en la que absolvió a las demandadas de todos los pedimentos incoados por la pretensora, pero gravándola en costas procesales.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de efectuar un recuento de la actuación judicial y la naturaleza de las pretensiones declarativas y condenatorias, concluyó que no es procedente efectuar un pronunciamiento frente a la reliquidación pensional que solicita la señora CECILIA SIERRA CORREA, en la medida en que el asunto fue resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que definió la cuantía del derecho pensional de invalidez del señor ÓSCAR HOYOS NARANJO, tornándose así improcedente un nuevo pronunciamiento judicial (minuto 00:01 a 17:08, doc.15, carp.01).

1.3. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses de la señora CECILIA SIERRA CORREA la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, conforme lo estatuye el artículo 69 del CPTSS, al no ser objeto de alzada.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El Grado Jurisdiccional se admitió el 1° de agosto de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 08 de del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

La vocera judicial de la AFP PORVENIR S.A. (doc.04, carp.02), presentó alegaciones a propósito de que se confirme la sentencia de primera instancia, y por tanto, permanezca indemne puesto que: *[a] raíz del contrato de renta vitalicia inmediata fue SEGUROS DE VIDA ALFA S.A quien se encargó de reconocer y seguir pagando la prestación que se venía reconociendo en favor de la parte beneficiaria para ello se entiende que con la modalidad de renta vitalicia contratada mi representada migró los aportes pensionales de la CAI con destino a la aseguradora quien se encargaría de seguir pagando la pensión, entendiéndose satisfecha cualquier obligación a cargo de mi representada; precisando que estuvo a su cargo el pago de la mesada pensional de invalidez del señor ÓSCAR HOYOS NARANJO hasta el mes de febrero de 2010, “por lo que la prestación a futuro estaría a cargo de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A en tanto PORVENIR S.A acreditó que los certificados de pago obrantes en el proceso que se correspondió con el respectivo reajuste en las mesadas pensionales, por lo que la pensión ascendió a la suma aproximada de \$ 2.400.000 según se desprende del guarismo realizado del retroactivo pagado, y por ende de las certificaciones de pago por parte de mi representada, es decir las sumas pagadas que correspondieran al valor del retroactivo antes del fallecimiento, esto es para febrero de 2010 fueron pagados por PORVENIR S.A según valor de \$130.343.881 una vez descontado el aporte en salud y que comprendería las mesadas entre el periodo 2005-7 a la fecha la muerte del afiliado en cuantía de una mesada ya reajustada. Se agrega que se realizó, un pago por valor adicional de indexación de las sumas adeudas por \$33.819.580 y \$21.700.000, por costas judiciales”.*

A su turno, la demandante y la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., guardaron silencio durante el término otorgado para la presentación de los alegatos de conclusión.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de CECILIA SIERRA CORREA.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar de si a la pretensora, CECILIA SIERRA CORREA, le asiste derecho al reajuste de la mesada pensional que actualmente disfruta con ocasión al deceso del señor ÓSCAR HOYOS NARANJO y en la cuantía que le fuera fijada a este por parte de la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de septiembre de 2018, así como también, se resolverá lo concerniente a la responsabilidad de la entidad integrante del SGSS en el pago de las mesadas, y la fecha de causación de los intereses de mora e indexación reclamados. Ulteriormente, la Sala se ocupará en determinar en el asunto puesto a consideración, el alcance y las obligaciones que dimanen del proceso judicial que en vida promovió el señor ÓSCAR HOYOS NARANJO, así como también, los efectos prácticos de la pensión de invalidez en la modalidad de renta vitalicia que le fue otorgada al susodicho, y su posterior sustitución pensional que disfruta la actora CECILIA SIERRA CORREA.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala revocará la decisión de primer grado, considerando que conforme a lo señalado por el artículo 73 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo normado por los artículos 46 y 48 del mismo compendio normativo, *[e]l monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba*; sin que resulte oponible el contrato de renta vitalicia suscrito con el causante señor ÓSCAR HOYOS NARANJO y la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., para hacer nugatorio el reajuste pensional reclamado por la señor CECILIA SIERRA CORREA, al obedecer el examen y fijación del *quantum* pensional del señor HOYOS NARANJO a las resultas del proceso con una sentencia proferida por autoridad judicial competente dentro del ejercicio de sus funciones, esgrimiendo para los anotados propósitos la tesis según la cual, dadas las características del seguro previsional de renta vitalicia, es la sociedad aseguradora la llamada a reconocer y pagar a favor de la actora, el reajuste pensional y el pago de las diferencias resultantes entre la mesada que hoy devenga la demandante y la que en época pretérita se cuantificó en sede judicial.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo,

probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el señor ÓSCAR HOYOS NARANJO disfrutó a partir del mes de marzo de 2008 la pensión de invalidez reconocida por parte de la AFP PORVENIR S.A. bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y a cargo de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. (pág.132, doc.02, carp.01 y págs.46 a 48, doc.08, carp.01); que el derecho pensional del señor ÓSCAR HOYOS NARANJO fue reliquidado en sentencia del 12 de septiembre de 2018 dictada por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir del 15 de julio de 2005 y en cuantía inicial de \$2.400.095,48, (págs 35 a 69 doc.02, carp.01), y que la AFP PORVENIR S.A. puso a disposición de las autoridades judiciales a través de depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia, las sumas de \$145.641.981, \$33.819.580 y \$21.700.00 por concepto de retroactivo pensional, indexación y liquidación de costas judiciales, respectivamente (págs. 138 a 140, doc.02, carp.01).

Adicionalmente, no se discute que SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. a partir del mes de marzo de 2010, reconoció a la demandante CECILIA SIERRA CORREA la sustitución pensional con ocasión del deceso del señor ÓSCAR HOYOS NARANJO en un porcentaje igual al 100% que venía disfrutando el mismo antes de la reliquidación ordenada por la Alta Corporación y bajo la modalidad de renta vitalicia (pág.10, doc.02, carp.01), y que la sociedad aseguradora continúa efectuando los pagos pensionales a la demandante en cuantía igual a un SMMLV (págs.50 a 55, doc.08, carp.01).

2.3.1 Del Sistema General de Seguridad Social: Sistema General de Pensiones.

Lo primero que ha de resaltar la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso es la creación, a partir de la promulgación la Ley 100 de 1993 del Sistema de Seguridad Social

Integral, incorporando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, la coexistencia de dos regímenes pensionales denominados en su orden, régimen de prima media con prestación definida –RPMPD- y régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS- (artículo 12, Ley 100 de 1993), los cuales tienen características diametralmente distintas y de naturaleza excluyente. Así, las prestaciones económicas a las que tendrá acceso el afiliado corresponderá a las condiciones preestablecidas en el régimen que se haya seleccionado.

El RAIS se define entonces como el *conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados¹, y se encuentra fundado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados². -Subrayado intencional de la Sala-*

2.3.1.1 Las características de la sustitución pensional por motivo de muerte en el RAIS:

partiendo de su regulación legal, los regímenes pensionales arriba descritos, traen consigo presupuestos comunes para acceder a las pensiones por los riesgos de invalidez y muerte. Así, para el caso de este último riesgo y en tratándose del RAIS, el artículo 73 de la Ley 100 de 1993 dispone que *[l]os requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad, así como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48, de la presente Ley*. Siendo ello así, en lo que respecta a la cuantía de la sustitución pensional por causa de muerte, el artículo 48 del compendio del SGSS, de manera diáfana y sin lugar a interpretación distinta, establece que *[e]l monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba*, mandato que cobra sentido bajo el supuesto que *«la sustitución pensional no constituye un derecho originario sino derivado»*, cuyas condiciones de causación forman elementos arraigados del derecho principal, como lo adocrinó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencias SL3168 de 2018, SL2597 de 2021 y SL875 y SL1830 ambas de 2022.

Así pues, los beneficiarios que cumplan los requisitos estipulados en el artículo 46³ de la Ley 100 de 1993, están llamados a percibir la prestación económica que disfrutaba en vida el

¹ Ley 100 de 1993, artículo 59.

² *Ibíd.*

³ ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de

causante, bien sea por causa de vejez o bien de invalidez, y así materializar el fin último de esta prestación, cual es, *menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial al mantenimiento de dicho grupo; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social*⁴.

2.3.1.2 Las fuentes de financiación que conforman la pensión de sobrevivientes en el RAIS: De acuerdo con lo señalado por el artículo 77⁵ de la Ley 100 de 1993, existe una clara diferenciación en lo que respecta a las fuentes de financiación o bien en los recursos de los que se nutre la prestación pensional por causa de muerte, distinción que se finca en el estatus que revestía el causante al momento de la muerte, esto es, si se trataba de un afiliado o de un pensionado.

Tratándose de la pensión de sobrevivientes por muerte de un afiliado, el financiamiento estará sujeto a *los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora;* mientras que, cuando se cause el derecho prestacional por causa del deceso de un pensionado del RAIS, la pensión se financiará *con los recursos previstos para el pago de la pensión de vejez o invalidez, según el caso, que estuviese recibiendo el causante al momento de su fallecimiento;* aclarando que *[c]uando la pensión de sobrevivientes sea generada por muerte de un pensionado acogido a la modalidad de retiro programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el exceso del saldo de la cuenta individual de ahorro pensional sobre el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes, podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo*

prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

⁴ Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencias SL494 de 2021 y SL3182 de 2022, entre otras.

⁵ **Ley 100 de 1993, artículo 77. Financiación de las pensiones de sobrevivientes.** 1. La pensión de sobrevivientes originada por la muerte del afiliado, se financiará con los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora. El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional, en razón de cotizaciones voluntarias, no integrará el capital para financiar las pensiones de sobrevivientes generadas por muerte de un afiliado, salvo cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de sobrevivientes. Dicho monto podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario hará parte la masa sucesoral del causante. 2. Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un pensionado, se financian con los recursos previstos para el pago de la pensión de vejez o invalidez, según el caso, que estuviese recibiendo el causante al momento de su fallecimiento. Cuando la pensión de sobrevivientes sea generada por muerte de un pensionado acogido a la modalidad de retiro programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el exceso del saldo de la cuenta individual de ahorro pensional sobre el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes, podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario hará parte la masa sucesoral del causante. PARÁGRAFO. Los sobrevivientes del afiliado podrán contratar la pensión de sobrevivientes con una aseguradora distinta de la que haya pagado la suma adicional a que se refiere el inciso primero de este artículo.

hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario hará parte la masa sucesoral del causante.

En virtud de lo expuesto, y con miras a una correcta comprensión de las fuentes de financiamiento en caso de la muerte de un pensionado, la Sala recuerda que de acuerdo con lo normado por el artículo 79 de la Ley 100 de 1993, el derecho pensional en el RAIS por los riesgos de IVM⁶, podrá otorgarse, a solicitud del afiliado o de consuno por sus beneficiarios, bajo las modalidades de: **i.** renta vitalicia inmediata; **ii.** retiro programado; **iii.** retiro programado con renta vitalicia diferida, o; **iv.** las demás que autorice la Superintendencia Financiera⁷; resultando por tanto tan relevante como necesaria la elección de una de las modalidades descritas, *en aras de que la entidad adquiriera certeza sobre la forma y términos en que debe comenzar a satisfacer la prestación, pues mientras ello no suceda, la AFP queda sumida en una total incertidumbre acerca de la manera en que debe comenzar a pagar la obligación que le concierne*⁸, al comportar características disímiles una y otra modalidad, *verbi gratia*, en lo atinente a la entidad llamada a pagar las mesadas pensionales y su cuantía.

Ahora, por razones de congruencia y metodológicas, la Sala procederá a definir la modalidad de renta vitalicia, con especial énfasis en la pensión de sobrevivientes, para ulteriormente, resolver de manera definitiva la cuestión litigiosa.

2.3.1.3 La renta vitalicia inmediata en la pensión de invalidez en el RAIS: como antelara la Sala, los requisitos para la causación y disfrute de la prestación por invalidez en el RAIS, por expresa disposición legal⁹, guardan identidad con lo establecido en el RPMPD¹⁰. Por ello, en estricta aplicación de lo señalado en el artículo 70¹¹ de la Ley 100 de 1993, para el financiamiento y disfrute de esta prestación, el afiliado puede optar por la modalidad de renta vitalicia, la cual por definición del artículo 80 ibídem consiste en que, **el afiliado o beneficiario**

⁶ Invalidez, vejez y muerte.

⁷ Superintendencia Financiera, circular externa No. 013 de 2012. Autoriza de manera general las siguientes modalidades de pensión: a. renta temporal variable con renta vitalicia diferida; b. renta temporal variable con renta vitalicia inmediata; c. retiro programado sin negociación del bono pensional, y; d. renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto.

⁸ Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencia SL2645 de 2016

⁹ **Ley 100 de 1993, artículo 69. Pensión de invalidez.** El estado de invalidez, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto y el sistema de su calificación en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente Ley.

¹⁰ Ley 100 de 1993, artículos 38 a 41.

¹¹ **Ley 100 de 1993, artículo 70. Financiación de la pensión de invalidez.** Las pensiones de invalidez se financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes. El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional, en virtud de cotizaciones voluntarias, no hará parte del capital para financiar las pensiones de invalidez, salvo que así lo disponga el afiliado, o cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de invalidez. El pensionado por invalidez podrá disponer del monto de las cotizaciones voluntarias no utilizado. Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la presente Ley se determine la cesación del estado de invalidez, la compañía de seguros deberá reintegrar a la cuenta individual de ahorro pensional, el saldo no utilizado de la reserva para pensiones, en la parte que corresponda a capital más los rendimientos, de la cuenta de ahorro individual y al bono pensional. En los eventos de que trata el inciso anterior, los afiliados tendrán derecho a que el Estado les habilite como semanas cotizadas aquéllas durante las cuales gozaron de la respectiva pensión. Esta habilitación del número de semanas será aplicable sólo cuando el Estado deba pagar garantía de pensión mínima. PARÁGRAFO. El afiliado podrá contratar la pensión de invalidez con una aseguradora distinta de la que haya pagado la suma adicional a que se refiere el inciso primero de este artículo

contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En orden a lo anterior, la administradora a la que se encuentre afiliado el beneficiario de una pensión de invalidez, deberá, para el caso de la renta vitalicia, prestar su asesoría para la contratación de la póliza de renta vitalicia¹², y sujetarse al procedimiento contemplado en el Decreto 719 de 1994, hoy compilado en el Decreto 1833 de 2016¹³; el que en síntesis se circunscribe a: **i.** la cotización de la póliza; **ii.** el suministro de los resultados de evaluación de propuestas al afiliado, y; **iii.** la selección directa del afiliado o autorización de éste a la sociedad administradora para escoger a nombre del susodicho la entidad aseguradora¹⁴; sociedad aseguradora que deberá garantizar, previo pago de la prima única de seguros al afiliado, sus beneficiarios y a la AFP:

1. La expedición de un seguro de renta vitalicia inmediata o el retiro programado con renta vitalicia diferido como modalidades para obtener su pensión, cuando así lo solicite expresamente el afiliado, el pensionado o sus beneficiarios según el caso, y

2. Que el seguro de renta vitalicia comprenda el pago de una pensión mensual no inferior al cien por ciento (100%) de la pensión de referencia utilizada para el cálculo del capital necesario. En todo caso, la sociedad administradora deberá informar a los afiliados y sus beneficiarios la opción prevista en este artículo, la cual se incluirá en los formatos que con carácter general señale la Superintendencia Financiera de Colombia, según lo prevé el parágrafo del artículo 3o del Decreto 719 de 1994¹⁵.

De lo hasta aquí discurrido, surgen como características principales de esta modalidad la contratación irrevocable de una póliza con una sociedad o entidad aseguradora, la cual ofrece certeza del monto inicial de la mesada pensional y la garantía de morigerar los efectos de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, con el reajuste anual de la mesada pensional y conforme el Índice de Precios al Consumidor – IPC, extendiéndose el pago periódico de la mesada al pensionado y a sus beneficiarios hasta la muerte del primero, y mientras subsista el derecho a recibir por los últimos, la pensión de sobrevivientes, y siendo ello así, la aseguradora asume la totalidad de los riesgos derivados no solo de la extralongevidad de todos los beneficiarios, sino también de toda aquella situación que modifique o afecte el derecho en

¹² Literal b, artículo 60, Ley 100 de 1993 y artículo 1, Decreto 719 de 1994, compilado en el Decreto 1833 de 2016.

¹³ Decreto 1833 de 2016, artículos 2.2.6.2.4, 2.2.6.2.6 y 2.2.6.2.7.

¹⁴ Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.6.2.7. (...) *En este caso deberá seleccionarse la entidad aseguradora de vida que ofrezca el monto de pensión más alto.*

¹⁵ Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.6.2.1. y Decreto 2555 de 2010, artículo 2.31.1.6.5.

sí mismo, pues recuérdese, que la aseguradora recibió de parte de la AFP el total del capital pensional que tenía en su CAI el beneficiario de la pensión, y, además, en atención a lo señalado en el artículo 70 de la Ley 100 de 1993 supradicho, la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión que está a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes.

2.3.2 Del Caso Concreto

Revisados entonces los medios de convicción que militan en el tracto procesal, se colige que la prestación económica que disfruta la demandante, señora CECILIA SIERRA CORREA, vía sustitución pensional, corresponde a la pensión por invalidez que, bajo la modalidad de renta vitalicia, percibía su compañero permanente, el señor ÓSCAR HOYOS NARANJO; prestación cuyo pago recae sobre la convalidada a juicio sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. (págs.10 a 11 doc.02, carp.01 y págs.50 a 60, doc.08, carp.01). Así también, a partir del año 2005 y como lo elucidó con fuerza de cosa juzgada la Corte Suprema de Justicia, la primera mesada que en derecho le correspondía percibir al señor HOYOS NARANJO asciende a la cantidad de \$2.400.095,48 (págs.35 a 69, doc.02, carp.01).

Del anterior marco fáctico y de lo hasta aquí discurrido, puede afirmar la Sala sin ambages, que la razón está de lado de la parte actora, pues con meridiana claridad y al tenor de las voces de los artículos 73 y 108¹⁶ de la Ley 100 de 1993, se activa por ministerio de la ley, no solo la garantía de correspondencia en un 100% entre la mesada pensional percibida por el causante y la de sobrevivientes que se otorgue y el reajuste automático conforme con el IPC, sino también, la obligación de la sociedad aseguradora de recalcular de manera posterior, el *quantum* de la mesada por cuenta de la irrefutable demostración judicial, que el derecho pensional no fue determinado en su completa dimensión por parte de la AFP.

Es de memorar por esta Corporación Judicial, las consideraciones expuestas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL1779 de 2019, que asuntó el deber de las aseguradoras en la modalidad de renta vitalicia, lo siguiente:

“(...) conviene precisar que cuando fallece el pensionado, (...) el artículo 77 de la Ley 100 de 1993, establece que «Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un pensionado, se financian con los recursos previstos para el pago de la pensión de vejez o invalidez, según el caso, que estuviese recibiendo el causante al momento de su fallecimiento».

¹⁶ **Ley 100 de 1993, Artículo 108. Seguros de participación.** Los seguros que contraten las administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes deberán ser colectivos y de participación. El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones cómo las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán contratar los seguros previsionales para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia. **Así mismo, las aseguradoras que asuman cualquier tipo de rentas vitalicias adoptarán para ello la modalidad de seguros de participación en beneficio de los pensionados.**

Lo que la norma quiere decir, es que la pensión de sobrevivientes, cuando muere el pensionado, como ya está financiada y se viene pagando, se continuará efectuando dicho pago con los recursos previstos para ello. (...) Como la norma no trae explicación en el caso de que el pensionado hubiere elegido la modalidad de renta vitalicia inmediata, (...) atendiendo a las reglas de dicha modalidad, la aseguradora que ha recibido el capital pensional, queda comprometida a pagar la pensión hasta su fallecimiento, y también a pagar la pensión de «[...] sobrevivientes a favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho», tal y como lo dispuso el artículo 80 Ley 100 de 1993. En conclusión, (...) al haberse elegido la renta vitalicia como modalidad de pensión, el capital acumulado por el afiliado en vida, ya no estaba en su cuenta de ahorro individual, pues la administradora de pensiones ya lo ha trasladado a la aseguradora, a quien como es lógico, le corresponde asumir la pensión de sobrevivientes a la que tienen derecho los beneficiarios de ley.”

En consecuencia, al encontrarse probado en el asunto de marras que el fallecido ÓSCAR HOYOS NARANJO en vida eligió que su pensión de invalidez se le pagara a través de la modalidad de renta vitalicia (págs.132 a 133, doc.02, carp.01) que finalmente estuvo a cargo SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. en póliza 70753 (pág.46, doc.08, carp.01, itera la Sala que, es a esta sociedad a la que le corresponde asumir el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el *de cujus* y en idéntica cuantía a la que a este le correspondió, incluyendo, por razones naturales, la reliquidación dispensada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la misma forma en que le hubiese correspondido asumir los riesgos de extralongevidad y financieros que la renta vitalicia le hubiere podido generar respecto del causante, como en líneas precedentes se precisó, sin que quepa responsabilidad alguna a la AFP accionada, toda vez que ésta se desligó de responsabilidad alguna frente al pensionado cuando pagó (con los recursos de la cuenta de ahorro individual y la suma adicional de la aseguradora previsional) la prima con la que se financió el contrato de renta vitalicia.

Bajo este presupuesto decisivo, de manera palmaria afloran los yerros en los que recayó la decisión hoy revisada al negar las pretensiones elevadas por la señora CECILIA SIERRA CORREA, por causa de una lectura reduccionista de los hechos y pretensiones en que se funda el problema jurídico, el que de acuerdo con una lectura integradora¹⁷, corresponde a identificar y establecer la responsabilidad de las entidades del SGSS convocadas a juicio, en el reajuste de la pensión de sobrevivientes de la pretensora, en razón de la reliquidación

¹⁷ Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la dictada el 14 de febrero de 2005, radicado 22923; SL580 de 2013, SL12499 de 2017 y SL1823 de 2018, ha resaltado la importancia de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a la administración de justicia, con el deber del juez de interpretar el genuino querer del titular de la acción judicial, sosteniendo que *[s]obre el tema en particular es preciso señalar que, la administración de justicia es uno de los ejes primordiales de toda democracia, pues a través de su ejercicio se hacen efectivos los derechos, garantías y libertades previamente consagrados en las disposiciones normativas; de allí que el legislador haya dotado a los servidores judiciales de múltiples mecanismos que les permitan llevar a cabo la noble misión de definir los conflictos sometidos a su competencia, con la mayor celeridad, transparencia y eficacia posibles, como claramente se establece en el artículo 1º de la Ley 270 de 1996, derroteros que el juez laboral está llamado a acatar sin perder de vista la trascendencia social de sus sentencias, ni soslayar tampoco el principio constitucional consignado en el canon 228 de la Carta, según el cual, las formalidades no pueden prevalecer sobre el derecho sustancial. Por ello se ha insistido en el deber que tienen los operadores judiciales de buscar el querer de las partes, indagar qué busca el demandante, cuál es la defensa del demandado, y para ello la obligación de interpretar el escrito inicial sea de la mayor trascendencia para evitar el desmedro del derecho sustancial, como lo ha precisado la Sala en diferentes pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia SL10473 – 2014, 6 ago.2014, rad.44484, para citar solamente una.*

reconocida a favor del causante señor ÓSCAR HOYOS NARANJO por parte de la Corte Suprema de Justicia, responsabilidad que, puntualmente en caso de la sustitución pensional de la señora SIERRA CORREA, no fue objeto de pronunciamiento judicial.

Por ello, se dispondrá por la Sala la revocatoria de la sentencia proferida el 16 de junio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en tanto en cuanto absolvió a las accionadas AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., de todas las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora CECILIA SIERRA CORREA, para en su lugar, CONDENAR a la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., a reconocer a la accionante el reajuste de la mesada pensional en los términos y cuantías determinadas de manera definitiva por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De suerte que, a partir del 17 de febrero de 2010 la mesada pensional por ajustar a favor de la señora CECILIA SIERRA CORREA asciende a la suma de \$3.051.819,90¹⁸; debiendo reconocer la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. la suma de \$570.627.865 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 17 de febrero de 2010 y el 28 de febrero de 2023; cuyo cuadro de liquidación se aneja a esta providencia. En el mismo sentido, se denota que sobre las mesadas antes descritas no ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, toda vez que, el derecho al reajuste en la mesada pensional a partir del mes de febrero de 2010 se hizo exigible con la ejecutoria¹⁹ de la sentencia del 12 de septiembre de 2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia, (págs.35 a 69, doc.02, carp.01), mientras que, la fecha de incoación de la presente acción, lo fue el 27 de septiembre de 2019 (pág.1, doc.02, carp.01), y por ende, no transcurrió el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Adicionalmente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el pensionado hubiere recibido durante el periodo reportado, normativa con base en la cual la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. está autorizada para descontar del retroactivo pensional adeudado, el monto correspondiente para sufragar los aportes para el sub-sistema general en Salud.

2.3.3. Los intereses de mora

¹⁸ Ver cuadro de liquidación elaborado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de instancia SL3882 del 12 de septiembre de 2018. OSCAR HOYOS NARANJO Vs AFP PORVENIR S.A., pág.10.

¹⁹ Artículo 118 del CGP.

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por la aplicación de reglas jurisprudenciales (CSJ SL1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que la causación de dichos intereses opera de manera automática cuando a partir del momento de la solicitud de la prestación no se otorga en los plazos establecidos por las disposiciones legales (CSJ SL-14693 del 23-08-2017, Radicado 46590; SL-4192 del 11-07-2018, Radicado 64180, SL-2149 del 03-04-2019, Radicado 60456, SL-4980 del 13-11-2019; SL-841 del 11-03-2020, Radicado 80192SL-2662 del 17-06-2020, Radicado 50231).

Adicionalmente, la Alta Corporación memoró que no era admisible sostener que el pensionado únicamente sufría un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación, y en ese sentido, subrayó que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es solo la de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también la de pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues, de lo contrario, se harán merecedoras a la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL-1681 del 03-06-2020, Radicado 75127; SL-3130 del 19-08-2020, Radicado 66868; SL-84820 del 10-02-2021, Radicado 84820, SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195; SL-1727 del 14-04-2021, Radicado 75173).

Así las cosas, sería del caso ordenar a la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. reconocer, liquidar y pagar intereses de mora en favor de CECILIA SIERRA CORREA; sin embargo, no soslaya la Sala que, esta no elevó ante la entidad aseguradora petición alguna tendiente a obtener el reconocimiento del reajuste pensional, y siendo ello así, no resulta procedente

exigirle a aquella el reconocimiento del reajuste pensional deprecado cuando no le fue radicada reclamación alguna.

Con todo, y habida cuenta que las sumas reconocidas se verán afectadas por la devaluación de la moneda, por razón de que vivimos bajo una economía notoriamente inflacionaria, la indexación pretendida de forma subsidiaria, se constituye en remedio efectivo a la devaluación de la moneda, más si se trata de obligaciones propias del sistema de seguridad social que tienen un notorio carácter alimentario (CSJ SL- 11818 del 08-08-1999, reiterada, entre otras, en la SL-54806 del 06-03-2013).

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en vista de que el fallo fue estudiado en bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de CECILIA SIERRA CORREA, no se impondrán costas procesales. Las de primera estarán a cargo únicamente de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. y a favor de la parte demandante, al ser vencida en juicio.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por CECILIA SIERRA CORREA, en contra de la AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA SA. En su lugar, DECLARAR que a la señora CECILIA SIERRA CORREA le asiste derecho al reajuste de la pensión de sobrevivientes que actualmente percibe por causa de la muerte del señor ÓSCAR HOYOS NARANJO, a partir del 17 de febrero de 2010 y en cuantía inicial de \$3.051.819,90, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., a reconocer y pagar a título de retroactivo pensional la suma de \$570.627.865, debidamente indexada, por concepto de diferencias resultantes entre la pensión que actualmente viene percibiendo la señora CECILIA SIERRA CORREA y la determinada por la Sala de Casación Laboral por la Corte Suprema de Justicia, durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2010 y el 28 de febrero de 2023. Autorizar a SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. a descontar del

retroactivo pensional el valor correspondiente para sufragar los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

TERCERO: CONDENAR a SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. a seguir reconociendo y pagando a favor de la señora CECILIA SIERRA CORREA, la mesada pensional en la suma de \$5.402.510,60, a partir del 1° de marzo de 2023, junto con los descuentos e reajustes de ley.

CUARTO: ABSOLVER a la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. de los demás pedimentos formulados por la señora CECILIA SIERRA CORREA, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.


QUINTO: ABSOLVER a la AFP PORVENIR S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora CECILIA SIERRA CORREA, según la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: Sin costas en esta instancia. Las de primera estarán a cargo únicamente de la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. y a favor de la parte demandante, al ser vencida en juicio.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
1988	27,00%			\$ -		\$ -
1989	26,00%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1990	26,10%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1991	26,10%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1992	25,00%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1993	22,60%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1994	22,59%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1995	19,46%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1996	21,63%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1997	17,68%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1998	16,70%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1999	9,23%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2000	8,75%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2001	7,65%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2002	6,99%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2003	6,49%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2004	5,50%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2005	4,85%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2006	4,48%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2007	5,69%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2008	7,67%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2009	2,00%	\$ -		\$ -		\$ -
2010	3,17%	\$ 515.000	\$ 3.051.819,90	\$ 2.536.820	12,50	\$ 31.710.249
2011	3,73%	\$ 535.600	\$ 3.148.562,59	\$ 2.612.963	14	\$ 36.581.476
2012	2,44%	\$ 566.700	\$ 3.266.003,98	\$ 2.699.304	14	\$ 37.790.256
2013	1,94%	\$ 589.500	\$ 3.345.694,47	\$ 2.756.194	14	\$ 38.586.723
2014	3,66%	\$ 616.000	\$ 3.410.600,95	\$ 2.794.601	14	\$ 39.124.413
2015	6,77%	\$ 644.350	\$ 3.535.428,94	\$ 2.891.079	14	\$ 40.475.105
2016	5,75%	\$ 689.454	\$ 3.774.777,48	\$ 3.085.323	14	\$ 43.194.529
2017	4,09%	\$ 737.717	\$ 3.991.827,18	\$ 3.254.110	14	\$ 45.557.543
2018	3,18%	\$ 781.242	\$ 4.155.092,92	\$ 3.373.851	14	\$ 47.233.913
2019	3,80%	\$ 828.116	\$ 4.287.224,87	\$ 3.459.109	14	\$ 48.427.524
2020	1,61%	\$ 877.803	\$ 4.450.139,42	\$ 3.572.336	14	\$ 50.012.710
2021	5,62%	\$ 908.526	\$ 4.521.786,66	\$ 3.613.261	14	\$ 50.585.649
2022	13,12%	\$ 1.000.000	\$ 4.775.911,07	\$ 3.775.911	14	\$ 52.862.755
2023		\$ 1.160.000	\$ 5.402.510,60	\$ 4.242.511	2	\$ 8.485.021
TOTAL						\$ 570.627.865